



---

## **El Cuadro Político Venezolano en el 2006: La Crisis por Falta de Consenso**

Análise de Conjuntura OPSA (nº12, novembro de 2005)  
ISSN 1809-8924

**Ana Maria Sanjuan**

Diretora do Centro para la Paz y los Derechos Humanos  
da Universidade Central de Venezuela

### **I.- Introducción**

Las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre de 2005 en Venezuela, pusieron de nuevo en evidencia la persistente complejidad del conflicto político venezolano, el alto grado de polarización de su sociedad, profundizando aún mas la crisis de representación por la que atraviesa el país desde comienzos de la década de los 90. El retiro a última hora de la oposición de dichas elecciones, un debate político crispado, superficial y centrado exclusivamente en la idoneidad de la institución electoral, el irrespeto por las reglas de juego democrático, la baja participación ciudadana en las mismas, y su resultado final, una asamblea nacional conformada exclusivamente por representantes identificados con el gobierno de Hugo Chávez, generan una serie de interrogantes acerca de los caminos que tomará en los próximos meses la disputa hegemónica que tiene lugar en Venezuela desde 1999.

Las sucesivas elecciones realizadas desde entonces para el manejo de la intensa confrontación sobre el poder, no han logrado en sí mismas soluciones a la crisis política estructural del país, ni logrado revertir el clima de confrontación, ya que las partes todavía persiguen eliminar más que convivir y acordar un modus vivendi con el adversario. La bipolarización política persiste justamente debido a que ni el gobierno ni la oposición están interesados en el desarrollo de estrategias para crear acuerdos de fundamentals con el otro sector, prevaleciendo más bien la no estrategia, es decir, la de ganar a toda costa,

preferiblemente si ello significa la eliminación del contrario. Existe en la actual coyuntura venezolana una discapacidad política de la sociedad para concertar unas mínimas agendas comunes, por lo que se juega permanentemente al suma cero, proceso más que deletéreo para la consolidación de la democracia.

Este ya prolongado conflicto por el poder, no sólo ha tenido lugar en el terreno institucional y político, sino también y principalmente en el campo simbólico. De hecho, además del control del Estado y de la industria petrolera, la confrontación entre las partes esta centrada en la redefinición de la democracia y sus formas, a través de la contraposición permanente de visiones y principios de la democracia liberal vs. la democracia social, presentándose a ambas como procesos excluyentes. En el complejo y tenso proceso sociopolítico que se desarrolla en Venezuela desde finales del siglo pasado, coexisten con inevitables tensiones, múltiples tendencias democratizadoras en el orden social con importantes déficits democráticos en el orden político e institucional, lo que retroalimenta constantemente la polarización y el conflicto, el cual por cierto, ya no solo es doméstico, dadas sus implicaciones y consecuencias subregionales, regionales y hemisféricas.

A continuación, se exponen brevemente las características más relevantes de la crisis política venezolana y sus causas, se realiza una lectura de la actual coyuntura, y a manera de cierre, se plantean más incertidumbres que conclusiones, considerando el descomunal desafío que representa para el sistema político, después de este descalabro electoral para ambas partes, reconstruir unos mecanismos de representación viables que de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2006, permitan que el conflicto social y político subyacente se desarrolle por cauces institucionales y democráticos.

## **II.- Algunos antecedentes de la crisis sociopolítica venezolana**

Venezuela sigue atravesando una coyuntura histórica y política particular, a través de un proceso socio-político enormemente ambivalente y lleno de contradicciones. Dicho proceso es sumamente complejo, con numerosas variables intervinientes, por lo que no admite simplicidad en su análisis. Puede ser considerado como un conflicto de transición, que se caracteriza por la fragilidad de los sistemas democráticos y que se expresa a través de las disputas entre actores rivales para hacerse del poder en procesos de transición y cambio político. La consolidación de la democracia venezolana sigue en desarrollo aunque en

riesgo, debido a que no ha desaparecido la amenaza de la violencia, de la salida anticonstitucional, mientras persisten algunas formas de movimientos antisistema. La confrontación política tiene también entre sus rasgos más relevantes la intolerancia y el personalismo en el estilo político de las nuevas élites políticas, una gran debilidad institucional, elevada corrupción y ausencia de contrapesos efectivos entre los poderes estatales.

El conflicto en Venezuela no es nuevo. Su eje estructural es la situación de grave inequidad social, junto a una enorme debilidad institucional del Estado y del sistema político para servirle de mediación. Un elemento característico de este conflicto por el poder, es el de la politización de las diferencias sociales. Las causas de la crisis son político-institucionales, socioeconómicas y de falta de acuerdos sobre las reglas de convivencia política.

Durante las décadas de los setenta y los ochenta, la politología latinoamericana y norteamericana consideró a Venezuela como un caso “excepcional” en América Latina<sup>1</sup>, debido a la sobrevivencia de su régimen político democrático en un contexto regional marcado por el autoritarismo militar. Junto con Costa Rica, Colombia y México, la democracia venezolana era estudiada como ejemplo a seguir para el diseño de fórmulas que permitieran garantizar la estabilidad institucional.

Sin embargo, casi en coincidencia con el inicio de la “tercera ola” de la democracia en la región, en Venezuela se evidenció a partir de 1989, una crisis político-institucional que aún amenaza la estabilidad democrática. Entre las causas estructurales de la crisis política, se encuentra el colapso del viejo sistema de conciliación de élites establecido en 1958 en el que los partidos Acción Democrática y COPEI se alternaron en el ejercicio del poder durante 35 años, basándose en tres factores fundamentales, el consenso y la participación regulada, la fortaleza de los partidos políticos sistémicos y más que la supeditación, como se comprobó más adelante, la convivencia pragmática de las fuerzas armadas con el poder civil. La relativa estabilidad política, hasta 1988, estuvo favorecida por la expansión sostenida del sector petrolero de carácter estatal, el cual impulsó el crecimiento de la economía en cotas elevadas hasta 1979.

---

<sup>1</sup> Ellner (1997) “Recent Venezuelan Political Studies: A Return to Third World Realities” en *Latin American Research Review*, vol. 32, number 2, pp 201-218.

Los límites de dicho arreglo político, también conocido como “Pacto de Punto Fijo”, comenzaron a expresarse desde los inicios de la década de los 80, en su creciente pérdida de capacidad para facilitar mediaciones efectivas entre el Estado y la sociedad; en el aumento de la abstención electoral; en 2 intentos de golpe de Estado (febrero y noviembre, 1992); en la salida de Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República, en medio de un juicio por corrupción y una intensa movilización social (1993); en el ascenso electoral de un partido distinto a los tradicionales, como lo fue la Causa R (1993) y; en los triunfos electorales de las propuestas de Caldera (1993) y Chávez (1998), que eran críticas del bipartidismo y la corrupción a él asociada<sup>2</sup>, produciéndose en el segundo caso un cambio sustancial en las élites que administran el poder estatal. El colapso del antiguo pacto no dio lugar, sin embargo, a un nuevo acuerdo, de distinto tipo y más influyente, y el debilitamiento de las organizaciones políticas no ha sido superado, dando paso a la emergencia de nuevos actores en la política con un gran déficit en su desempeño democrático, negociador y facilitador de mediaciones.

La defectuosa institucionalización de la democracia venezolana y su incapacidad para resolver los problemas sociales, se combinó con una deficiente modernización y el resultado del estancamiento del desarrollo socioeconómico tras decenios de progreso continuado. Ello extendió sentimientos de frustración entre los sectores más desfavorecidos de la población, contribuyendo a la paulatina disolución del mito de la inclusión, lo que creó serios problemas en la legitimación del poder y del sistema político. Durante dos décadas, grandes masas de la población demandaron al sistema político una distribución más equitativa de los recursos disponibles.

Sin embargo, el tema de la desigualdad social desempeñó un papel político secundario, y los intereses de los no privilegiados estuvieron infra representados en la agenda política. No hubo solamente disfunciones de ingeniería institucional o torpeza de las elites en la interpretación de la nueva realidad social. Además del reduccionismo democrático, en el sistema político precedente imperó la impunidad, la corrupción pública, la opacidad administrativa y la subordinación del poder judicial al ejecutivo. La crisis produjo uno de

---

<sup>2</sup> Los programas de gobierno de Rafael Caldera (1993) y de Hugo Chávez (1998), que fueron preferidos por la población, eran abiertamente críticos de la corrupción, de las reformas económicas intentadas en 1989 y del bipartidismo. Aunque Caldera fue fundador de COPEI, rompió con ese partido y se postuló con una alianza distinta de pequeños partidos. Ver: Rafael Caldera, “Mi Carta de intención con el pueblo de Venezuela”. Mimeo. Caracas, 1993; y Hugo Chávez, “La propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela”. Mimeo. Caracas, 1998.

los casos mas graves de desmantelamiento del sistema de partidos políticos de América Latina.

Las características más relevantes del actual conflicto venezolano son, en lo político-institucional: (i) el colapso del sistema de partidos y de los mecanismos tradicionales de representación, (ii) la participación de los militares en la política, (iii) el rol político de los medios de comunicación, (iv) cambio de élites y competencia por el poder estatal, (v) déficit en la capacidad de gobernar y (vi) limitaciones en la vigencia del imperio de la ley. En lo económico-social, alimentan el conflicto: (vii) la pronunciada caída del ingreso per cápita en los últimos 20 años, (viii) la desigualdad en el acceso a los recursos y bienes públicos, (ix) la pobreza, (x) el desempleo y subempleo y (xi) elevadas tasas de desempleo juvenil. Y en cuanto a la crisis de consenso, sus elementos fundamentales son: (xii) las incompatibilidades entre los proyectos de país, (xiii) la polarización y territorialización social y política y (xiv) la percepción de inclusión-exclusión.

### **III. La crisis sociopolítica en la actualidad**

Desde finales de la década de los 80 tiene lugar en Venezuela una intensa confrontación por el poder, que transcurre mediante el intento de los dos sectores enfrentados por dos proyectos de país. Este impasse es causado por una compleja crisis de tres carriles, que tiene expresiones en el orden político-institucional, en el económico-social y en el del consenso o fundamentals. Todo ello ha generado profundas convulsiones sociales y políticas, que en la actualidad se evidencian en una aguda polarización política, en la que los bandos políticos en pugna han apelado, con frecuencia, al irrespeto de las reglas del juego democrático junto al uso de la violencia verbal y física, amenazando así seriamente la estabilidad institucional del país. El enfrentamiento por el poder, ocurre, además, por: (i) divergencias sobre los proyectos de país enarbolados por cada sector, que parecieran ser, en algunos aspectos, prima facie, incompatibles; (ii) divergencias sobre los medios o estilos de llevar a cabo la política.

Los tres carriles de la crisis que se viene manifestando en Venezuela a partir de los años ochenta, entran en resonancia en la actual coyuntura. En el orden político-institucional, ha sido determinante el descalabro, como se apuntó antes, del pacto de élites preexistente, sin que haya dado lugar a un nuevo acuerdo. En el orden económico, la crisis del modelo de

desarrollo fundamentado en la renta petrolera y el crecimiento a través del proceso de sustitución de importaciones, así como las reformas posteriores, no lograron reducir la pobreza y aumentaron la inequidad y, lejos de existir consenso sobre el modelo de desarrollo necesario, existe una gran divergencia en torno a ello. En el orden social, las grandes inequidades, que ya habían generado presiones sobre la gobernabilidad y las capacidades estatales para el cumplimiento de los derechos de la población, han entrado en un proceso de politización produciendo una confrontación entre sectores sociales.

Así las cosas, la polarización venezolana actual se explica entonces por factores históricos, estructurales y de estilo político de las nuevas élites dirigentes, incluyendo un extremismo verbal y una alta emocionalidad de las partes en el manejo y confrontación de sus intereses, prevaleciendo en cada coyuntura de crisis narrativas ideológicas contrapuestas. Ambas partes sostienen discursos excluyentes y encontrados sobre aspectos sustantivos y políticos alimentando una radicalización que podría perdurar más allá de coyunturas gobierno-oposición. La cara más visible del conflicto venezolano, tras la que se esconden otros factores, sin duda, más relevantes y/o estructurales, es la repetida e intensa confrontación por la permanencia o salida de Hugo Chávez de la Presidencia de la República.

Mediante diversas encuestas se conoce que los venezolanos, pese a encontrarse profundamente divididos por causas políticas (Venezuela es en este momento la sociedad más polarizada de la región de las Américas), prefieren resolver sus conflictos a través de la democracia y sus instituciones. Ello fue evidente en la amplia participación de la población en el Referéndum Revocatorio de 2004, en el que el Presidente Hugo Chávez fue ratificado en la presidencia con casi el 60% de los votos válidos, proporción similar a la que obtuvo en las elecciones de 1998 y 2000. Sin embargo ni estos resultados, ni los de las elecciones de octubre de 2003, en los que el “chavismo” obtuvo 20 de los 22 estados en los que fueron disputados cargos para gobernadores y 270 de las 337 alcaldías del país, ni las recientes elecciones parlamentarias (a las cuales se hace referencia posteriormente), han abierto paso a la resolución de la crisis política venezolana.

Es importante señalar que el modelo de democracia presente en la Constitución de 1999, estimula un sistema de participación y representación en el que los partidos políticos ocupan un papel más que secundario, nulo. En este contexto, la política venezolana está respondiendo más a lealtades a liderazgos personales y carismáticos que a identidades

partidistas estables. Ni las fuerzas políticas que respaldan al gobierno, ni las nuevas que han surgido en la oposición, muestran señales de consolidación en tanto partidos políticos autónomos, respecto del liderazgo personal de sus fundadores, ya que son más que todo y hasta ahora, partidos electoralistas personalistas. Por su parte, los partidos tradicionales (AD y COPEI), dan cada vez mayores muestras de decaimiento y, eventualmente, de extinción. Asimismo, tanto los partidos emergentes como los históricos, cuya actual conformación como sistema correspondería a la de un “multipartidismo inestable”, siguen mostrando una elevada fragilidad organizativa y una escasa repercusión social, lo cual es un grave obstáculo para una mediación democrática del conflicto político y para una representación cabal de la pluralidad de la sociedad venezolana.

Como se señaló supra, no hay una visión compartida de las élites sobre temas sustantivos, ni sobre los modos de hacer política. No hay consenso sobre cuáles deben ser los procedimientos para dirimir los conflictos y sobre las alternativas de políticas para el país. Entre los principales puntos de desacuerdo se encuentran: (a) el rol del Estado en la sociedad; (b) el manejo y propiedad de la industria petrolera; (c) las alternativas de políticas para la resolución de los principales problemas del país (exclusión social, desempleo, pobreza, educación, seguridad social, seguridad ciudadana); (d) el tipo de democracia (democracia liberal vs. democracia social o democracia representativa vs. democracia participativa) y (e) política exterior y alineación internacional.

Visto lo anterior, y como se señaló arriba, el país atraviesa un proceso de cambio que es complicado de desentrañar y, por lo que se alcanza a ver, muestra diversas direcciones y es, incluso, contradictorio en muchos aspectos. Dicho proceso carece, por ahora, de una dirección precisa, no hay, pues, un camino establecido, aunque ciertamente en muchos ámbitos se observa la pretensión de llevar adelante transformaciones de fondo orientadas hacia el beneficio de los sectores populares, bases de sustentación del gobierno del Presidente Chávez.

A lo largo del 2005, el Presidente Chávez ha mencionado con insistencia que Venezuela avanza en la dirección del “socialismo del siglo XXI”, un proyecto hasta ahora muy vago, el cual ha sido interpretado por las partes de diversas maneras. Por el momento no pasa de ser una consigna política, poderosa en ciertos sectores proclives al gobierno y poderosa también, aunque por distintas razones, para los sectores adversos, los cuales ven llegada la

hora que tanto se temían, la de la implantación en Venezuela de un modelo político y económico al estilo cubano. Demás esta decir, así pues, que este anuncio gubernamental forma parte del debate político nacional, contribuye a ideologizarlo aún más y, en ciertos ámbitos, a radicalizarlo. Sin embargo es importante destacar que por el momento, y en lo que respecta a sus estructuras y a sus mecánicas básicas de funcionamiento, Venezuela continua siendo un país capitalista, indudablemente capitalista. Por su parte, la opinión pública parece tener claridad al respecto: 70,5% de la población se ha pronunciado por el respeto a la propiedad privada y es de señalar que 69% de los sectores D y E, donde se concentran los más pobres, opinaron que la misma debe mantenerse.

Por otro lado, en lo que concierne más estrictamente al ámbito político, se observa, como ya se indicó, un gran impulso hacia la participación popular, manteniéndose además una revolución de expectativas entre la población. La nueva Constitución Nacional le ha abierto el espacio a la acción de múltiples e importantes movimientos sociales (se observa un fenómeno importante de “empoderamiento”), mientras que, al mismo tiempo, cabe observar cómo prevalecen – y hasta se agravan - perversas maneras de hacer política ligadas al clientelismo, a la corrupción y el autoritarismo en dependencias del gobierno y en varios de los partidos y grupos políticos que lo sustentan (los mecanismos de selección empleados para la escogencia de candidatos a la Asamblea Nacional, Gobernaciones y Concejos municipales fueron emblemáticos en lo que respecta a la falta de democracia interna dentro del propio chavismo). En el mismo sentido cabe llamar la atención, igualmente, sobre el intento de crear una nueva institucionalidad (en la cual se aprecian algunos logros de peso), mientras el Estado se mantiene como un aparato muy poco eficaz, sobre todo en la atención de los grupos sociales más vulnerables.

Como síntesis de estos últimos años, correspondientes a la gestión del Presidente Chávez, podría decirse que la bonanza petrolera ha impactado positivamente la economía y permitido, gracias a la orientación política del gobierno, una importante transferencia de recursos hacia los sectores populares, mejorando ligeramente la distribución de la riqueza, entre otras vías, a través del aumento del gasto social; que se ha registrado, en este último año y hasta las elecciones del 4 de diciembre, la reducción relativa de las expresiones más virulentas de la polarización; que se ha constatado el estímulo a la organización y participación social, con sus contradicciones y ambigüedades en relación con la autonomía o el clientelismo, implicando un avance organizativo de los sectores populares, histórica y

estructuralmente discriminados; que hay reivindicación estatal en la protección de los derechos sociales, mientras se ha colocado un freno a la ideología del mercado. Todo lo anterior sucede mientras se ha puesto de manifiesto la intolerancia y el personalismo en el estilo político de las nuevas élites; existen enormes déficit institucionales para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las políticas públicas; se ha hecho evidente la ausencia de una política sistemática de información e indicadores que permitan procesos actualizados y continuos de evaluación, convalidación y control ciudadano de las políticas públicas; así como la ausencia de contrapesos efectivos entre los poderes estatales; que se ha introducido una reforma regresiva, conservadora e inconstitucional del Código Penal; la difusión de discursos que presentan las políticas sociales y otros mecanismos de distribución de la riqueza como dádivas o producto de la buena voluntad de los gobernantes y no como derechos de toda la población y la ausencia de una agenda legislativa articulada, y coherente en relación con la política social.

El Presidente Chávez es un líder muy carismático con innegables tentaciones autoritarias, las cuales manifiesta en su pretensión de controlar los poderes públicos. Siendo esto cierto, también es verdad que en Venezuela existen las condiciones legales y políticas para contrarrestar estas pretensiones, ya que siguen abiertos los espacios para la disputa política, aunque con ventajas para el Gobierno. El bajo nivel de competencia política persiste debido a la existencia del chavismo como un actor hegemónico sin hasta ahora, contrapesos sociales y políticos efectivos, lo que contribuye a que se pierda la lógica del equilibrio y controles propios de la democracia, favoreciéndose las dinámicas autoritarias.

La voluntad hegemónica del actual gobierno se refleja de múltiples maneras en el terreno simbólico, ámbito en el que el chavismo adquirió rápidamente un monopolio (la ideología es el escenario de lucha por excelencia en los procesos de cambio político), en la apropiación de símbolos, estímulo al nacionalismo y refundación de la república. El despliegue del monopolio simbólico va desde las instituciones del estado hasta el sector de comunicación, en el que se ha promovido la creación de más de 500 medios alternativos, implementado una ley de restricción de contenidos en los medios de comunicación privados e impulsado el proyecto regional TELESUR.

Chávez mantiene un alto nivel de popularidad (entre 45% y 55% según las últimas encuestas), nivel que no se relaciona con la eficacia de su gobierno (el cual es muy mal

evaluado en las últimas encuestas, sin que tal evaluación afecte, por ahora, al Presidente) ni con el bienestar generado para la población. La inclusión simbólica de la población por largo tiempo marginada, invisible para casi todos los efectos por parte de la antigua élite gobernante, sigue pagando dividendos para el Gobierno y buena parte del país sigue poniendo su esperanza en él, y una todavía mayor lo apoya porque percibe que la oposición representa un pasado al cual bajo ningún motivo se quiere regresar.

Según la mayoría de las encuestas efectuadas a lo largo de los últimos años, la oposición venezolana cuenta con el apoyo de un potencial de más de 40% de la población, el cual adversa más o menos reciamente al actual gobierno desde 1999. Sin embargo, el desempeño de la dirigencia de oposición no solamente no ha logrado aumentar ese porcentaje, sino que lo ha reducido considerablemente en algunos eventos electorales recientes, resultado de una política confusa, contradictoria (llamar a votar y a la abstención al mismo tiempo), pero, principalmente, por carecer de un proyecto alternativo de inclusión social y política de las mayorías pobres y de unas propuestas convincentes, susceptibles de ser percibidas como atractivas (no una vuelta al pasado, debe reiterarse) por parte de los venezolanos.

Varios factores externos inciden en el desarrollo político nacional, creándose en esta coyuntura una compleja interrelación entre lo externo y lo interno. Se observa desde 2004, un viraje geopolítico importante, el cual implica, por una parte, desafíos estratégicos crecientes con Washington, y por la otra, vínculos muy cercanos, aunque a diferentes velocidades y con diferentes intereses, con la mayoría de los países de América Latina, especialmente con Cuba, Argentina y Brasil. Asimismo, se han acrecentado las relaciones políticas y económicas con la España gobernada con el PSOE y con China e India. En el fondo se ha tratado de construir una agenda exterior alternativa en fondo y forma y en contraofensiva a la política de Washington, cuyos objetivos primordiales son la promoción del multilateralismo, la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, la propuesta de una integración económica y política alternativa a la neoliberal (integración hacia adentro mediante la solidaridad, la complementaridad económica y la cooperación), todo lo cual tiene como propósito diversificar las relaciones internacionales de Venezuela, evitar el aislamiento, reducir la vulnerabilidad, mejorar los lazos con Latinoamérica, garantizar respaldo regional a las tesis externas claves como la de la integración, generar

asociaciones prácticas sin costos adicionales y aumentar la visibilidad del país tanto en la región como a nivel mundial.

#### **IV. Las elecciones parlamentarias del 4 diciembre**

Según estaba previsto en el cronograma electoral venezolano, a principios del mes de diciembre de este año se llevaron a cabo los comicios para renovar totalmente la Asamblea Nacional. Las semanas previas al día de las elecciones estuvieron marcadas por a) el hecho de que las encuestas anunciaban una mayoría parlamentaria muy clara a favor de los partidarios del gobierno, potenciada de manera importante por el uso de un mecanismo electoral coloquialmente llamado “las morochas”, que vulneraba radicalmente el principio de la representación de las minorías, potenciando la representación oficialista por encima de lo que, sin el uso de tal mecanismo, le otorgaba la votación depositada en las urnas y b) por la desconfianza del sector opositor en la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), razón por la cual una parte del mismo hizo llamados a la abstención. Así, la campaña electoral se desarrolló por un ambiente caracterizado por cierta apatía (las encuestas previas registraban niveles importantes de desinterés) y la carencia casi absoluta de propuestas por parte de los partidos políticos y la certidumbre de la victoria de los partidarios del gobierno.

Sin embargo, pocos días antes de la elección y tras haberse concertado un acuerdo entre el CNE y los partidos políticos de oposición, labrado gracias a la intervención de la OEA, la mayoría de la oposición retiró a sus candidatos a la Asamblea Nacional. Lo sorprendente es que mediante dicho acuerdo, se satisfacían casi todas las condiciones pedidas por la oposición a los efectos de tener unos comicios “razonables” en cuanto a la transparencia de los resultados y el resguardo del secreto del voto, temas de capital importancia en los requerimientos de la oposición. No obstante y tras haber celebrado ese acuerdo, uno de los partidos, Acción Democrática, como se sabe uno de los partidos más importantes de la oposición venezolana, al menos históricamente, anunció su retiro de los comicios, sin que mediara razón alguna, tal y como fue recogido por los observadores de la Unión Europea y la OEA. A partir de la decisión de Acción Democrática tuvo lugar la renuncia de los demás partidos, muy presionados por los medios de comunicación social privados, un actor de primerísima importancia en el escenario local, de manera de que a la postre las elecciones parlamentarias sólo contaron con la presencia de los partidos oficialistas, sin que hubiese

competencia con los grupos opositores.

Los comicios parlamentarios mostraron una gran abstención, la cual llegó al 75%, es decir, aún mayor que la de las elecciones municipales, que históricamente tienen las cifras más elevadas de ausentismo. La oposición ha invocado esa cifra como un gran triunfo, señalando que, como consecuencia de ella, la Asamblea Nacional no es legítima y que es el comienzo de la deslegitimación interna e internacional del gobierno del Presidente Chávez. Por el contrario, diversos analistas políticos han señalado que la abstención es un mensaje diverso que tiene diferentes destinatarios y que sería un error muy grave considerarlo como un endoso a los opositores del gobierno. Consideran, por el contrario, que si bien ocasionó un daño considerable al gobierno, es, igualmente, una pérdida para la oposición y, sobre todo, una pérdida para todo el país.

Los observadores del proceso comicial, tanto nacionales como internacionales coincidieron en los siguientes puntos: a) el CNE estableció las condiciones necesarias para que el proceso fuera transparente, gracias a las medidas tomadas antes, durante y después del proceso de votaciones, b) el gobierno incurrió en prácticas que implicaban un claro ventajismo, c) la mayoría de los medios de comunicación social actuó de manera sesgada, bien hacia el gobierno, bien hacia la oposición, contribuyendo, además, a la polarización política del país. Resaltaron, asimismo, el clima de confrontación política y la necesidad de crear espacios para el diálogo y negociación, dadas las graves fracturas políticas que evidencia la sociedad venezolana.

¿Que repercusión política tendrá el hecho de que el país cuente con una Asamblea Nacional copada totalmente por parlamentarios pertenecientes a los partidos afectos al gobierno?. ¿Será la Asamblea Nacional el recinto en donde se condensarán las disputas que desde hace un tiempo han aflorado dentro del propio chavismo, en buena parte contenidas hasta ahora por la necesidad de enfrentar a la oposición, el “enemigo común”? ¿Que uso hará de su mayoría el gobierno? ¿La empleará para radicalizar la acción de gobierno, para “decretar” el socialismo, para prolongar el mandato del Presidente Chávez o para aprobar determinadas medidas requeridas por “el proceso”? ¿Procurará el gobierno otros espacios para darle cabida a la oposición?. ¿La oposición jugará cartas extremas, distintas a la electoral?. Estas son algunas de las preguntas que se plantean a raíz de los resultados del 4 de diciembre, los cuales ponen en jaque la representación política de cerca de la mitad del

país.

Las interrogantes anteriores deben ser consideradas tomando en cuenta que en el año 2006 tendrán lugar los comicios presidenciales, estando en juego la reelección del Presidente Chávez. Desde ya, la oposición ha asomado la posibilidad de no participar, buscando escalar un peldaño más en la deslegitimación del gobierno, si no cambian radicalmente las bases del sistema electoral, en particular la composición de la directiva del CNE, integrada hasta ahora de manera parcializada hacia el gobierno.

## **V. Conclusiones**

Es claro que la crisis política no pasa, de manera esencial, aún cuando sea importante, desde luego, por la creación de las condiciones requeridas por la oposición de cara a las elecciones presidenciales. Como se señaló anteriormente, la crisis política del país se debe a la falta de acuerdos básicos mínimos en torno a ciertos aspectos fundamentales para el desenvolvimiento de la sociedad venezolana. La cuestión de fondo es, por tanto, si se habrá ocasión y lugar para el diálogo y la negociación de tales acuerdos o si, por el contrario, la lucha política tendrá como norte imponer una hegemonía, implicando la derrota del otro.

Los problemas estructurales que han llevado a las crisis de las democracias en la América Latina, persisten en el país: desigualdad social, fragilidad del sistema de partidos e impotencia del Estado en el logro de sus objetivos fundamentales. Así, en el contexto para la realización de los mencionados consensos básicos, supondría distintas cosas, entre las cuales cabe mencionar, como desafíos más urgentes, reconstituir un sistema político en el que los conflictos sean democráticamente procesados, el fortalecimiento de un Estado capaz de asegurar la democracia social y los derechos fundamentales, la separación de poderes, el control de la corrupción, encontrar un equilibrio novedoso entre democracia liberal y social, el manejo de las tensiones inevitables entre los partidarios de la revolución o reforma, la desmilitarización y desmediatización de la política

La complejización de la sociedad venezolana no puede ser procesada en el sistema de representación en vigencia en el país, ni por las organizaciones partidistas tradicionales, ni por las emergentes, ni sólo a través de los movimientos sociales. Después del colapso del sistema de partidos vigente hasta finales de la década de los 80, no ha podido reconstruirse

un sistema de instituciones políticas capaz de propiciar mediaciones efectivas y algunos consensos mínimos, entre intereses tan múltiples y fragmentados como los que caracterizan hoy en día a la sociedad venezolana. Para lograr el objetivo de cierta institucionalización política, que permita un manejo democrático del conflicto político persistente, la construcción de instancias políticas más estables, lo suficientemente flexibles para seguir tramitando la alta demanda de participación política que caracteriza ahora a la sociedad venezolana, especialmente a los sectores populares. Un mínimo grado de institucionalización política permitirá miradas al conflicto de más largo plazo, superar los bloqueos políticos y repolitizar la política, desestimulando con ello la emergencia y consolidación de actores no tradicionales en la política, como los medios de comunicación y los militares.

La recuperación de la gobernabilidad democrática en Venezuela, requiere considerar que la democracia no solo son elecciones o instituciones, sino también un régimen político que promueve el diálogo y posibilidades de administrar los conflictos sin violencia. Es necesario entonces promover un consenso social sobre los principales problemas del país y sobre cómo resolverlos, tarea en la que el gobierno tiene la principal responsabilidad, aunque no de forma individual, lo que implica reconocer a los adversarios políticos y promover el respeto y la convivencia democrática con las diferencias. En este aspecto es capital la promoción y educación de valores democráticos y actitudes cívicas. La ausencia de diálogo democrático entre los actores políticos eleva a niveles inmanejables y peligrosos la polarización política. El riesgo de la violencia sigue estando presente, por lo que el diálogo, la palabra y el reconocimiento político y social siguen siendo insoslayables en la actual coyuntura. Un resultado positivo para la paz y la democracia dependerá de la disposición y moderación para el diálogo por parte del gobierno y la oposición y claramente, en la capacidad de recomponer un sistema de mediaciones políticas en la que los partidos recobren su rol fundamental, sin sustituir otras instancias igualmente cruciales en la vida política y social.